



SANCIÓN DISCIPLINARIA Por omitir el deber de declararse impedido para actuar en las acciones realizadas contra la firma DMG, debido a la existencia de un posible conflicto de intereses

CONFLICTO DE INTERESES-Responsabilidad objetiva

El disciplinado prosiguió su discurso cuestionando también el que el Despacho lo hubiere declarado responsable objetivamente del conflicto de intereses, lo cual considera un desacierto jurídico porque en materia disciplinaria se encuentra proscriba toda forma de responsabilidad objetiva, es decir, “las faltas se infrigen a título de dolo o culpa”, pues deben darse los elementos de la culpabilidad. Dicho de otro modo, no basta que la conducta se impute de manera objetiva (autoría material), sino también subjetiva (culpabilidad) y al desvirtuarse la culpabilidad, el dolo en este caso, se desdibuja el reproche disciplinario.

Para esta instancia disciplinaria la censura se encuentra absolutamente fuera de contexto, pues nótese que el Despacho dedicó acápites independientes a cada una de las categorías de la falta y los desarrolló de la misma manera, es así como al postular una realización objetiva de la conducta estaba refiriéndose, en ese momento, a la adecuación típica del comportamiento y más adelante abordó el tema de la imputación subjetiva en el aparte correspondiente a la culpabilidad, donde se calificó la falta a título de dolo, de tal suerte que el cuestionamiento del disciplinado carece de fundamento, toda vez que los análisis fácticos y jurídicos discurrieron en la providencia de manera secuencial, hilvanada y lógica.

ILICITUD SUSTANCIAL-Como elemento fundamental para la proscripción de la responsabilidad objetiva

Por lo cual trajo a colación apartes de la publicación JUSTICIA DISCIPLINARIA “De la ilicitud sustancial a lo sustancial de la ilicitud”, contenidos en las páginas 26 y 27. En los párrafos que transcribió se puede leer que la ilicitud sustancial disciplinaria debe ser entendida como la afectación sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública y aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario la conducta se considera desprovista de ilicitud sustancial si se determina que no incidió en la garantía de la función pública y los principios que la gobiernan. De acuerdo con ello dicho, se debe descartar la responsabilidad derivada del quebrantamiento formal de la cobertura jurídica de la norma, por lo que esta deberá soportarse en la comprobación de la transgresión de los presupuestos señalados, lo que redundará en una efectiva aplicación de la justicia y la verdadera proscripción de la responsabilidad objetiva. Con base en las anteriores consideraciones el disciplinado solicitó que se resolviera la nulidad y que fueran tenidas en cuenta las argumentaciones de los alegatos de conclusión.

A este Despacho no le resta más que agregar que no resulta procedente la solicitud del disciplinado, como quiera que de acuerdo con lo indicado anteriormente este Despacho sí se pronunció sobre la nulidad impetrada y sobre los argumentos de los alegatos de conclusión que presentó el disciplinado, por lo tanto se atenderá a lo dicho en el fallo del 21 de febrero del año en curso sobre el particular

INCUMPLIMIENTO DEL DEBER LEGAL-Definición

Todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga un interés particular y directo en su regulación, gestión, control o decisión. Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido.



CONFLICTO DE INTERESES-Omisión del Personero de Bogotá de declararse impedido para actuar ante DMG/ **DEBER DEL SERVIDOR PÚBLICO**-Consagración Constitucional

Para esta instancia emerge con claridad meridiana que la defensa invierte el orden de las cosas en la interpretación de la norma, pues no se trata de que su prohijado hubiera desplegado una conducta constitutiva de conflicto de intereses lo que es objeto de censura, sino de que existiendo el prenombrado conflicto no debió haber actuado y para ello es que se encuentra prevista la figura del impedimento precisamente.

...Para este Despacho no puede perderse de vista que entre los deberes funcionales del Personero estaba el de hacer que se respetaran la Constitución y las leyes y al incurrir él mismo en el desobedecimiento del mandato de declararse impedido por existir un conflicto de intereses previsto en el artículo 40 del CDU, incurrió en un quebrantamiento de la ley disciplinaria del modo que se ha señalado insistentemente, de ahí pues que resulte insoslayable la vulneración sustancial a ese concreto deber funcional

... se colige que la referencia a la injustificación de la conducta como elemento imprescindible de la categoría dogmática aludida no excluye, como pretende la defensa que hizo el fallo, la consideración de la vulneración sustancial del deber funcional de ROJAS BIRRY por vía del desconocimiento de los principios de imparcialidad, transparencia y correcto ejercicio de la función pública que la rigen, porque en aras de preservar los mismos ROJAS BIRRY ha debido marginarse de cualquier actuación que le correspondiera adelantar, en su calidad de Personero, con relación a DMG.

DOLO-Alcance/**DOLO**-Irregularidades cometidas por el Personero de Bogotá

Una conducta es dolosa cuando el agente conoce los elementos constitutivos del deber y omite su realización o conociendo los elementos constitutivos de la prohibición realiza la conducta. Se explicó que en materia disciplinaria el dolo se compone de un elemento cognoscitivo y otro volitivo, a su vez el elemento cognitivo se divide en dos:

- 1. El conocimiento de los elementos de la conducta descrita en el mandato o prohibición.*
- 2. El conocimiento mismo del deber o prohibición*

...En su condición de Jefe del Ministerio Público en el Distrito Capital de Bogotá, es incuestionable el conocimiento que debía tener del artículo 40 del Código Disciplinario Único, esto es, la norma que le imponía el deber de declararse impedido para “actuar” en un asunto cuando tuviera un interés particular y directo en su control, forma que entre las posibles contempladas por la disposición en cita es la que le correspondía a la Personería dada la naturaleza de sus funciones. Al no declararse impedido incurrió en la omisión de dicho deber, que a su vez es constitutiva de falta gravísima, acorde con lo normado por el numeral 17 ibídem. A contrario sensu no solo no se declaró impedido sino que tuvo una actuación cuando designó funcionarios de la entidad bajo su dirección para que participaran como veedores en los operativos de intervención en contra de DMG, el grupo que lo favoreció con 200 millones de pesos antes de posesionarse como Personero, cuando lo correcto hubiese sido que se separara por completo y en cualquier sentido del asunto, habida cuenta de sus lazos con el grupo empresarial objeto de intervención. De lo dicho emerge más allá de toda duda que se estructuran los elementos constitutivos del dolo, como quiera que si el agente conocía y a pesar de ese conocimiento actuó, sin que mediara en su favor causal alguna de exclusión de responsabilidad, es porque así lo quiso, es decir, actuó con conocimiento y voluntad, esto es, con dolo.



	Despacho Procurador General de la Nación
Radicación	IUS 73572 / IUC-792-109462
Disciplinable	FRANCISCO ROJAS BIRRY-Personero de Bogotá
Quejoso	De oficio
Fecha hechos	21-11-2008
Asunto	Auto que resuelve recurso de reposición

Bogotá, D.C., 15 de mayo de 2012

1. ASUNTO POR TRATAR

Procede el despacho a resolver los recursos de reposición interpuestos contra el fallo del 21 de febrero de 2012 por la defensa técnica y material del señor FRANCISCO ROJAS BIRRY.

2. HECHOS

Se investigó en el presente caso el conflicto de intereses en el que incurrió el Personero de Bogotá FRANCISCO ROJAS BIRRY al comisionar a servidores públicos de la entidad a su cargo para que en calidad de veedores se hicieran presentes en los operativos contra la firma DMG, a pesar de los vínculos personales que tuvo el disciplinado con miembros de esa empresa al haber recibido de ese grupo doscientos millones de pesos (\$200.000.000.00), según información reportada por la Unidad de Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación y de acuerdo con publicaciones de los diarios El Tiempo y El Espectador (folios 3 a 5).

3. SÍNTESIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL

La Procuraduría Delegada para la Economía y la Hacienda Pública, por auto del 13 de marzo del 2009, abrió investigación disciplinaria en contra de FRANCISCO ROJAS BIRRY (folios 6 y 7).

Por auto del 27 de abril del 2009 se adoptaron las siguientes decisiones:

Se declaró la nulidad de la actuación disciplinaria desde el auto de investigación inclusive y se dispuso nuevamente la apertura de INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA contra FRANCISCO ROJAS BIRRY en su condición de Personero de Bogotá.

A través del auto del 15 de enero de 2010 se evaluó la investigación de la siguiente forma:

1. Se ordenó el archivo de la investigación en lo relacionado con presuntas falsedades consignadas en el formato único de hoja de vida; el presunto ocultamiento de información en la declaración de bienes y rentas y actividades económica privada; el presunto ocultamiento de información en una declaración juramentada sobre un



proceso de alimentos; las presuntas irregularidades en el cumplimiento de los requisitos para acceder al cargo; por la inasistencia a la sesión plenaria ordinaria del 19 de marzo de 2009, realizada en el Concejo de Bogotá, D.C.; por el presunto recibo de dinero de la firma DMG.

2. Se elevó pliego de cargos en contra del señor FRANCISCO ROJAS BIRRY, en su condición de Personero de Bogotá, D.C., por omitir el deber de declararse impedido para actuar en las acciones realizadas contra la firma DMG, debido a la existencia de un posible conflicto de intereses y haber expedido las resoluciones 402, 404 y 406 del 21 de noviembre de 2008 mediante las que comisionó a servidores públicos de la Personería de Bogotá con el propósito de que en su calidad de veedores asistieran a los operativos en contra de DMG que se llevarían a cabo el 21, 22, 23 y 26 de noviembre del mismo año (folios 915 a 956).

Se profirió auto por medio del cual se ordenaron pruebas de descargos (folios 1022 a 1028).

Mediante auto del 2 de septiembre de 2010 se corrió traslado a los sujetos procesales para presentar alegatos de conclusión (folio 1085).

El 13 de mayo de 2011 se profirió un auto para mejor proveer, por medio del cual el Despacho ordenó oficiosamente la práctica de visita especial al Proceso Penal nro. 110016000101200900004, adelantado en contra de FRANCISCO ROJAS BIRRY por el delito de enriquecimiento ilícito de particulares (folios 1138 y 1139).

Con fecha 27 de enero de 2012 se corrió traslado nuevamente a los sujetos procesales para alegatos de conclusión. El día 16 de febrero de 2012 el doctor Carlos Mario Isaza, como defensor principal del disciplinado, presentó sus alegatos y el doctor FRANCISCO ROJAS BIRRY, el día 20 del mismo mes radicó dos escritos, en uno propuso nulidades (folios 1205 a 1213) y, en el otro, alegatos de conclusión (folios 1214 a 1243).

Conforme con lo anterior, una vez presentados los descargos, practicadas las pruebas decretadas de oficio y a petición de parte, y radicados los alegatos de conclusión, este Despacho profirió fallo de única instancia mediante proveído del 21 de febrero de 2012, en el cual se declaró responsable al doctor FRANCISCO ROJAS BIRRY por haber incurrido a título de dolo en la falta disciplinaria gravísima de que trata el numeral 17 del artículo 48 del CDU, en concordancia con lo previsto por el artículo 40 ibídem. Con base en lo anterior se lo sancionó con DESTITUCIÓN e INHABILIDAD GENERAL por el término de DOCE (12) AÑOS.

El disciplinado FRANCISCO ROJAS BIRRY interpuso recurso de REPOSICIÓN contra el fallo sancionatorio proferido en su contra, mediante memorial que se recibió en la entidad el 13 de marzo del año en curso (folios 1333 a 1404); al tiempo que su apoderado recurrió la mencionada providencia a través de escrito que presentó el día siguiente, esto es, el 14 de marzo de 2012 (folios 1405 a 1404).



4. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN

4.1. Recurso de reposición presentado por el doctor FRANCISCO ROJAS BIRRY.

4.1.1. Afectación a las Garantías Constitucionales.

En primer lugar, manifestó que al momento de adoptarse la decisión sancionatoria en su contra no fueron tenidos en cuenta los argumentos contenidos en los alegatos de conclusión y que pasó inadvertida la solicitud de nulidad que hizo en sendos escritos que presentó el día 20 de febrero de 2012, por lo tanto considera que dicha inobservancia afectó las garantías constitucionales, pues en el proceso adelantado en su contra se evidencia una transgresión al debido proceso y al derecho de defensa, lo que daría lugar a la declaratoria de nulidad del fallo sancionatorio.

Hizo énfasis en que la petición de nulidad fue presentada dentro del término previsto por la ley disciplinaria, es decir, antes de que se proferiera fallo definitivo y el funcionario competente estaba en la obligación de resolverla a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la fecha de recibido. Dijo que la petición se presentó el 20 de febrero, el fallo fue del día siguiente 21 de febrero y que el operador disciplinario no se pronunció al respecto, de ahí la afectación al derecho de defensa como quiera que la figura busca dejar sin efecto los actos procesales realizados con violación de los parámetros fijados en el ordenamiento jurídico.

En apoyo de sus pretensiones el disciplinado trajo a colación varios pronunciamientos de este órgano de control, entre los cuales se cita el que hizo la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública dentro del Radicado nro.162-135826-06, cuando declaró la nulidad de lo actuado a partir inclusive del pliego de cargos del 25 de abril de 2005:

“(…)

También encuentra el Despacho, que en los alegatos de conclusión se solicitó la nulidad procesal, petición que no fue resuelta antes de proferirse el correspondiente fallo de instancia, y aunque en la decisión de primera instancia se hacen algunas consideraciones muy sucintas al respecto, **en definitiva no se resuelve puntualmente sobre la nulidad impetrada**, circunstancia que del mismo modo viola el debido proceso y el derecho de defensa del procesado” (folio 11 del memorial de descargos) (resaltado fuera de texto).

Señaló además el disciplinado que era su deber poner de presente esa situación, pues en su criterio lo que se evidenciaba era que en el afán de producir un fallo antes de que culminara su periodo legal como Personero de Bogotá, D.C., se violentaron flagrantemente sus derechos, pues de otra manera no se explicaba que al día siguiente del vencimiento de los términos para alegar de conclusión, se proferiera la decisión sancionatoria, sin tener en cuenta los aspectos destacados.



En cuanto al primer reparo del recurrente sea lo primero señalar que resulta cuando menos desconcertante para este Despacho la aseveración de FRANCISCO ROJAS BIRRY en el sentido de que supuestamente no se resolvió la nulidad propuesta por él en escrito del 20 de febrero del año que corre, ello por cuanto la notificación del fallo sancionatorio del 21 de febrero de 2012 proferido en su contra se surtió por edicto, como quiera que ni él ni su abogado defensor atendieron las citaciones que se les hizo por escrito para realizar la notificación de manera personal, razón por la cual al no comparecer personalmente ni por conducto de su apoderado el disciplinado no pudo acceder al expediente y desde luego tampoco recibir copia de la providencia en la que, claramente y a contrario sensu de lo que él reclama, en el capítulo "VIII. DE OTRAS DECISIONES", visible de folios 1295 a 1298 a folios 52 a 55 del fallo, se resolvió desfavorablemente la nulidad impetrada pues con base en el contenido de los principios de instrumentalidad y de trascendencia se estimó que los derechos del recurrente no habían sufrido menoscabo alguno, independientemente del procedimiento adoptado para su investigación y juzgamiento, porque lo cierto es que a lo largo de la actuación se le garantizó la publicidad de las actuaciones, se le permitió intervenir en todas las etapas del proceso, conocer, aportar y controvertir las pruebas, dicho de otro modo, se respetaron sus derechos fundamentales.

En lo concerniente a la segunda censura planteada por el doctor FRANCISCO ROJAS BIRRY, tampoco prosperará dado que pese a lo manifestado por él, las pruebas ingresaron al expediente de manera válida, con un ingrediente adicional y es que él las conocía con suficiente antelación pues estuvo presente en la audiencia del proceso penal seguido en su contra, en la que fueron introducidas y admitidas en tal calidad, ocasión en la que tuvo la oportunidad de tacharlas, cuestionar su legalidad y controvertirlas, pero no hizo ninguna de estas cosas.

Ahora, el Despacho procedió a resolver la nulidad en el fallo teniendo en cuenta que tanto el proveído que decide este tipo de solicitudes como los fallos de única instancia son susceptibles del recurso de reposición, razón por la cual ningún derecho se estaba vulnerando al decidir lo concerniente a la nulidad en el mismo acto en que se puso fin al proceso, ya que nada se oponía a que si la defensa se mostraba en desacuerdo con lo resuelto interpusiera el recurso respecto a la negativa de la nulidad y en contra del fallo de instancia. De ahí que el Despacho desestime las alegaciones del doctor ROJAS BIRRY en punto de la nulidad.

4.1.2. De los argumentos en los que se funda el recurso de reposición.

Expresó el doctor ROJAS BIRRY que nunca se configuró el presunto conflicto de intereses que le fue enrostrado, pues el operador disciplinario lo fundó en el recibo de dineros dejando de lado los demás elementos que configuran la falta contemplada en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002, de cuya lectura se colige que el interés particular y directo que se le imputó no puede interpretarse exclusivamente en el presunto recibo de dineros, pues para que el interés se viera materializado debía estar presente la intencionalidad de asumir una situación en la que se realizara alguno de los verbos rectores descritos en la norma: regulación, gestión, control o decisión; y expresó que aun cuando el fallador le endilgó como verbo rector el control



ello no ocurrió, pues el control de los procedimientos para intervenir a la firma DMG se ejecutó en virtud de la potestad constitucional de declarar el estado de excepción-emergencia económica- asignada por el artículo 215 de la Constitución, como facultad legislativa extraordinaria y transitoria para expedir decretos con fuerza de ley, al Presidente de la República; y con base en esa potestad fue que se expidieron los Decretos Ley 4333 y 4334 del 17 de noviembre de 2008, por medio de los cuales se decretó el estado de emergencia económica en todo el país y se fijaron los procedimientos a seguir.

El disciplinado transcribió algunos artículos de los decretos en mención, en especial los del Decreto 4334 en el que se declaró la intervención estatal y se precisó que la intervención se haría a través de la Superintendencia de Sociedades, bien de oficio o a través de la Superintendencia Financiera, definieron el objeto, la naturaleza, la competencia y las medidas de intervención. El doctor ROJAS BIRRY hizo hincapié en que en los referidos decretos no se atribuyó el control, la decisión, la intervención y/o la regulación de dicho proceso a la Personería, pues la misma norma la asigna a la Superintendencia Financiera.

Agregó que el propio gobierno designó a la doctora MARÍA MERCEDES PERRY FERREIRA como agente interventora, encargada de realizar todas las gestiones y de controlar los operativos, con lo que, según dice, se desvirtúa que del acompañamiento de la Personería se pudiera inferir un interés directo y particular que constituyera el conflicto de intereses:

“(…) el control de los procedimientos para intervenir a la firma DMG, como ya lo señalé, fueron ordenados (sic) por el Presidente de la República mediante decreto legislativo, designando así a la doctora María Mercedes Perry Ferreira, quien fue la encargada de realizar todas las gestiones y **controlar** los operativos llevados a cabo, desvirtuando de esta manera que del **acompañamiento** por parte de la Personería Distrital pueda inferirse un interés directo y particular, como quiera que al probarse la exclusión de la competencia de la Personería de Bogotá en el control de dicho proceso, se desestima la conveniencia o beneficio en que se funda el **interés directo** (...)”.

Advirtió que dentro de las funciones que ejercía la Personería de Bogotá se encontraba la de veedor ciudadano, sin que de ella se pudiera deducir control alguno porque, según él, se **“EXCLUYE la competencia para controlar”** por la naturaleza de las actividades contempladas en el artículo 100 del Decreto 1421 de 1993, máxime cuando esa entidad no tenía la competencia para ejercer dicho control.

4.1.2.1. Valoración de las pruebas.

Considera el recurrente que en el fallo se afectó su derecho de defensa al fundar su conducta en **“haber querido ocultar a toda costa y es que se supiera que él también como muchos otros connotados personajes en el país, se había beneficiado del respaldo económico de DMG”**, porque asevera que tal fin no se probó y porque en ejercicio de su derecho de defensa, para desvirtuar esa



afirmación, aludió al oficio del 28 de mayo de 2009, donde la Agente Interventora de DMG María Mercedes Perry Ferreira certificó que “revisada la documentación hallada en la toma de posesión de las compañías intervenidas relacionadas con DMG no se encontraron registro (sic) o documento a nombre de FRANCISCO ROJAS BIRRY (folio 401)”, manifestando que dicha certificación no fue valorada por el Despacho y que fue desvirtuada con meros supuestos, refiriéndose a lo consignado en el fallo sancionatorio en el parágrafo 4 de la página 68.

Calificó de apreciación subjetiva la afirmación del Despacho, basada en conjeturas desprovistas de soporte probatorio y dijo que, por el contrario, las pruebas llevaban al convencimiento de que esos dineros nunca entraron a su patrimonio ni al de su núcleo familiar y que la misma Fiscalía General de la Nación así lo había dicho al encontrar justificado su patrimonio. Ello aunado a lo manifestado por la interventora llevaba a la conclusión de que era inexistente la afirmación del recibo del dinero.

Sobre los anteriores razonamientos del doctor ROJAS BIRRY, caben las siguientes anotaciones: en primer lugar, valga resaltar que esta aseveración efectuada por el disciplinado no se ciñe a la verdad, pues el Despacho no solamente sí se pronunció sobre la comunicación de la agente interventora María Mercedes Perry sino que, además, la descartó como prueba exoneratoria por virtud de los testimonios rendidos por los señores DAVID MURCIA y WILLIAM SUÁREZ, en los que de manera clara se incriminó a ROJAS BIRRY cuando expresaron que el señor SUÁREZ personalmente le había entregado a aquel la suma de doscientos millones de pesos provenientes de la firma DMG. En segundo lugar, resulta de capital interés hacer énfasis en el hecho de que encontrándose presente en la audiencia en la que los mencionados declarantes lo comprometieron, el señor ROJAS BIRRY no los controvirtió ni desmintió sus asertos, se limitó a guardar silencio; comportamiento que, como se dijo en el fallo, llamó poderosamente la atención del Despacho, pues la defensa desaprovechó una oportunidad única para esclarecer los hechos en caso de que lo dicho por esos testigos hubiese sido falso. Por lo tanto, la actitud del encartado no hizo otra cosa que reforzar la convicción de esta instancia disciplinaria, acerca de la veracidad de las imputaciones que se le formularon al entonces Personero de Bogotá.

Así mismo, en punto de que la Fiscalía encontró justificado su patrimonio, es menester aclarar que tal aseveración del disciplinado es solo parcialmente cierta, como quiera que el funcionario de Policía Judicial José Víctor Malaver Peña el 15 de mayo de 2009 rindió a la Fiscal Sexta un informe sobre el estudio patrimonial que se hizo a ROJAS BIRRY y a su núcleo familiar, el cual fue introducido como prueba de la Fiscalía a través del testimonio que éste rindió en la audiencia de juicio oral del 24 de enero de 2012, en el que se expresó que entre enero de 2007 y marzo de 2009 el patrimonio de FRANCISCO ROJAS BIRRY estaba justificado, **excepto por los 200 millones de pesos que recibió de DMG como producto de actividades de lavado de activos, a pesar de que estos dineros no aparecieran reflejados en sus declaraciones de renta** (folios 1313 y 1314).

Así pues, las conclusiones del investigador de policía judicial son diferentes de las que mencionó el doctor ROJAS BIRRY y ello se desprende claramente de un párrafo del informe que en su momento rindió el servidor Malaver Peña, al que éste aludió



en su testimonio del 24 de enero del año en curso y fue citado de manera literal en el fallo en los siguiente términos:

«Así las cosas se concluye que Francisco Rojas Birry recibió 200 millones de pesos sin ninguna razón, incrementando injustificadamente su patrimonio a pesar de no reflejar el ingreso del dinero en sus declaraciones de renta». (Folio 1313).

En la sustentación del recurso de reposición agregó el doctor ROJAS BIRRY que el interés particular y directo al expedir las Resoluciones 401, 406 y 408 del 21 de noviembre de 2008 que se le endilgó no existió y que se ignoró el acervo probatorio obrante en el expediente, el cual demostraba que jamás impartió directrices a los funcionarios comisionados para que ocultaran información que lo vinculara con la firma DMG, pues su función era la de veedores que se concretó en el acompañamiento y señaló que ello se encontraba corroborado por el documento de la agente interventora al que se hizo referencia previamente, pero que el Despacho descartó al darle valor probatorio cuando adujo **“(...) lo cierto es que ello pudo obedecer, en primer lugar, a que los soportes contables de la comercializadora DMG fueron incautados en operativos masivos adelantados por el Gobierno Nacional en los que bien pudo extraviarse valiosa información, entre ella la que comprometía al señor ROJAS BIRRY (...)**”, indicó que en la investigación no obraba prueba que permitiera inferir que la información de los operativos de intervención pudo perderse, por ello si el Despacho tenía esa convicción debió buscar los elementos materiales probatorios que condujeran a la certeza de esa suposición.

Sobre las mencionadas aseveraciones este Despacho encuentra oportuno recordarle al doctor ROJAS BIRRY, pues así quedó plasmado en la providencia sancionatoria, que la certificación de la agente interventora en el sentido de que en la toma de posesión de las compañías intervenidas relacionadas con DMG no se encontraron documentos ni registros a nombre de ROJAS BIRRY, sí fue valorada aunque no como prueba de la ausencia de responsabilidad del disciplinado, porque contrario a lo sostenido por él, en el proceso obran medios de convicción que llevan a conclusión diferente de la suya, como son el informe sobre el estudio patrimonial del inculpado rendido por el funcionario de Policía Judicial José Malaver Peña; las interceptaciones de llamadas telefónicas surtidas entre empleados de confianza del Grupo DMG y las declaraciones del Presidente de la compañía y de su cuñado, quienes al referirse precisamente a la ausencia de prueba documental que comprometiera al Personero FRANCISCO ROJAS BIRRY, fueron los que aludieron a la pérdida de información en desarrollo de los operativos, queda claro entonces que esta “percepción” del Despacho no fue un mero producto de “la mente perversa y dañina de los sustanciadores del despacho del Procurador General de la Nación”, como la asevera el disciplinado en su escrito, sino que fue la explicación ofrecida por los testigos MURCIA y SUÁREZ al interrogárseles puntualmente sobre el particular .

El disciplinado prosiguió su discurso cuestionando también el que el Despacho lo hubiere declarado responsable objetivamente del conflicto de intereses, lo cual considera un desacierto jurídico porque en materia disciplinaria se encuentra proscrita toda forma de responsabilidad objetiva, es decir, “las faltas se infrigen a título de dolo



o culpa”, pues deben darse los elementos de la culpabilidad. Dicho de otro modo, no basta que la conducta se impute de manera objetiva (autoría material), sino también subjetiva (culpabilidad) y al desvirtuarse la culpabilidad, el dolo en este caso, se desdibuja el reproche disciplinario.

Para esta instancia disciplinaria la censura se encuentra absolutamente fuera de contexto, pues nótese que el Despacho dedicó acápites independientes a cada una de las categorías de la falta y los desarrolló de la misma manera, es así como al postular una realización objetiva de la conducta estaba refiriéndose, en ese momento, a la adecuación típica del comportamiento y más adelante abordó el tema de la imputación subjetiva en el aparte correspondiente a la culpabilidad, donde se calificó la falta a título de dolo, de tal suerte que el cuestionamiento del disciplinado carece de fundamento, toda vez que los análisis fácticos y jurídicos discurrieron en la providencia de manera secuencial, hilvanada y lógica.

Por último, el doctor ROJAS BIRRY se refirió al tema de la ilicitud sustancial como elemento fundamental para la proscripción de la responsabilidad objetiva, para lo cual trajo a colación apartes de la publicación JUSTICIA DISCIPLINARIA “De la ilicitud sustancial a lo sustancial de la ilicitud”, contenidos en las páginas 26 y 27. En los párrafos que transcribió se puede leer que la ilicitud sustancial disciplinaria debe ser entendida como la afectación sustancial de los deberes funcionales, siempre que ello implique el desconocimiento de los principios que rigen la función pública y aunque el comportamiento se encuadre en un tipo disciplinario la conducta se considera desprovista de ilicitud sustancial si se determina que no incidió en la garantía de la función pública y los principios que la gobiernan. De acuerdo con ello dicho, se debe descartar la responsabilidad derivada del quebrantamiento formal de la cobertura jurídica de la norma, por lo que esta deberá soportarse en la comprobación de la transgresión de los presupuestos señalados, lo que redundará en una efectiva aplicación de la justicia y la verdadera proscripción de la responsabilidad objetiva. Con base en las anteriores consideraciones el disciplinado solicitó que se resolviera la nulidad y que fueran tenidas en cuenta las argumentaciones de los alegatos de conclusión.

A este Despacho no le resta más que agregar que no resulta procedente la solicitud del disciplinado, como quiera que de acuerdo con lo indicado anteriormente este Despacho sí se pronunció sobre la nulidad impetrada y sobre los argumentos de los alegatos de conclusión que presentó ROJAS BIRRY, por lo tanto se atenderá a lo dicho en el fallo del 21 de febrero del año en curso sobre el particular.

4.2. Recurso de reposición presentado por el doctor Carlos Mario Isaza Serrano como apoderado del disciplinado.

El apoderado del doctor ROJAS BIRRY a través de memorial en el que recurrió el fallo de única instancia proferido en contra de éste, inició su intervención solicitando que se revocara el fallo, que su prohijado fuera exonerado y se dispusiera el archivo del proceso; a continuación estableció el escenario y propuso los argumentos de la impugnación.



Manifestó que el Despacho invocó la ilicitud sustancial y la culpabilidad sin efectuar su análisis fáctico ni jurídico y sin embargo adujo que ROJAS BIRRY tenía un interés que le concernía de manera directa y particular en los asuntos de DMG y sabía que por ello existía un conflicto de intereses con el interés general que como servidor público debía representar, sin que para el efecto tuviera relevancia el que la participación de la entidad a su cargo fuera por iniciativa suya o por solicitud de terceras personas, no obstante, contrariando las previsiones legales para estos casos, omitió apartarse de este asunto.

La defensa se mostró en desacuerdo con el Despacho cuando en el fallo planteó que era irrelevante que la participación de la Personería fuera a iniciativa de ROJAS BIRRY o por solicitud de terceras personas, pues asevera que además de que quedó expuesto en el expediente que los agentes del Ministerio Público Distrital designados por el titular de ese órgano no tuvieron ningún control real ni material sobre los operativos que realizaron otras autoridades, no se demostró de manera convincente cual era la acción que constituía el conflicto de intereses.

Indicó que se hace incurrir a la defensa en confusión porque en el auto de cargos la acusación se hizo en torno a haber omitido declararse impedido para actuar en las acciones realizadas contra la firma DMG, debido a la existencia de un conflicto de intereses con esa sociedad y haber expedido las Resoluciones 402, 404 y 406 del 21 de noviembre de 2008 mediante las cuales se comisionó a funcionarios de la Personería de Bogotá para que, en calidad de veedores, asistieran a los operativos adelantados contra el mencionado grupo que tuvieron lugar el 21, 22 y 23 de noviembre de ese año, mientras que en el fallo se alude a la omisión de apartarse del conocimiento de las actuaciones que involucran a DMG cuando fue intervenido por orden de autoridad competente teniendo en cuenta que existía un vínculo entre ambos por cuenta del dinero que el personero recibió de la firma.

Agregó más adelante que no fueron varias las actuaciones que involucraban a DMG y en el auto de cargos el Despacho habló de que ROJAS BIRRY no se declaró impedido para actuar comisionando a funcionarios de la entidad para que asistieran a los operativos, pero que se contradijo cuando adujo que el Personero realizó la falta disciplinaria por omisión del deber de declararse impedido y por acción al expedir actos comisionando a servidores de su entidad para asistir a los operativos "cuando el correlato positivo de dicha omisión fue ese, no declararse impedido para actuar designando dichos funcionarios".

Manifestó que el Despacho le indicó a ROJAS BIRRY en los cargos que su interés consistió en que en los archivos de la empresa se hallara su nombre o algún documento que lo vinculara con la misma, dando a entender que con la designación de los funcionarios se iban a producir conductas ilegales respecto de tales evidencias, y por esta razón no podía decir ahora en el fallo sancionatorio que el interés directo sobre el que le asistía su control era la veeduría en los operativos en contra de DMG, por ello dice que ahora que se había demostrado que los funcionarios no recibieron instrucción distinta a la de obrar conforme a la Constitución y a la ley como garantes del debido proceso, el operador disciplinario no podía pregonar que había incurrido en violación de la norma por no haberse marginado de la designación de funcionarios



suyos para que estuvieran presentes en la intervención. Y que de considerarlo así, frente al asunto de la designación de los funcionarios, el despacho del Procurador estaba en la obligación de explicar cuál interés tenía el Personero y qué control tenía sobre dicho interés.

La defensa sostiene que son dos asuntos diferentes y que no se podía ponerla a realizar una actividad defensiva respecto de la primera hipótesis y fallarle sobre otra no formulada y mucho menos debatida y controvertida probatoriamente en la acusación.

Al revisar los argumentos de la defensa técnica esta instancia disciplinaria colige que lo que plantea es una incongruencia entre el cargo y el fallo, queriéndose hacer ver que surgen contradicciones e incoherencias atribuibles al Despacho, pero lo cierto es que no existen tales pues desde el principio los hechos fueron expuestos de manera clara y al confrontarlos con la norma disciplinaria se encontró que se adecuaban a lo que se considera incumplimiento del deber recogido en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002, que prevé que todo servidor público deberá declararse impedido para actuar en un asunto cuando tenga un interés particular y directo en su regulación, gestión, **control** o decisión. Cuando el interés general, propio de la función pública, entre en conflicto con un interés particular y directo del servidor público deberá declararse impedido.

Así las cosas, el Despacho encontró que ROJAS BIRRY había recibido la suma de 200 millones de pesos de la firma DMG en el mes de enero de 2008; que meses después, cuando ya se encontraba ejerciendo sus funciones como Personero Distrital se requirió por cuenta de otras autoridades que la entidad a su cargo participara a título de veedora en los operativos de intervención contra DMG, el mismo grupo que meses atrás le había facilitado los recursos mencionados, para lo cual ROJAS BIRRY comisionó a unos servidores de la Personería revistiéndolos con las mismas facultades que a él le otorga la ley en esos casos y aunque se quisiera hacer ver que la función de veeduría como garante de derechos fundamentales nada tenía que ver con el control, eso resulta inaceptable porque en el evento de que en desarrollo de los procedimientos de intervención se presentara violación de garantías fundamentales, extralimitación de funciones u otras conductas anómalas por parte de las autoridades que llevaban a cabo los procedimientos, el Despacho se pregunta ¿cuál sería el papel de la Personería, de qué forma podría servir de garante si no fuera, precisamente, ejerciendo un control que se vería traducido en los informes que debía rendir como resultado de su actividad y a través de los cuales se daría parte a los competentes para que emprendieran las acciones de ley si a ello hubiere lugar? Y eso es, a no dudarlo, una forma de control.

En este punto cabe recordar que desde el inicio del proceso contra DMG, ROJAS BIRRY negó de manera reiterada y enfática el haber recibido dinero de esa firma, pero al tenerse por cierto ese evento emergió de manera indubitable para esta instancia disciplinaria el interés del entonces Personero en las resultados de la intervención y por ende de la participación de los funcionarios de la entidad a su cargo en los operativos y ello es necesario mirarlo desde dos frentes, el primero porque en desarrollo de tales procedimientos pudieran hacerse hallazgos que lo



comprometieran y permitieran desvirtuar de plano sus argumentos defensivos y, el segundo, porque para que le fueran desembolsados los 200 millones de pesos debió adquirir compromisos con DAVID MURCIA que pudo pensar los podía redimir, así fuera en parte, a través del ejercicio de veeduría de la entidad a su cargo como garante de los derechos fundamentales de DMG en los operativos.

Allí es donde se evidencia el interés en el control que asistía a ROJAS BIRRY el cual vislumbró este Despacho y la defensa desestima y de allí la censura que se le formuló al ex servidor público en la medida en que a sabiendas de su vínculo con la sociedad que se iba a intervenir y de que le asistía un interés particular en ejercer un control en desarrollo de los operativos en los términos antes mencionados, procedió a designar a subalternos suyos para que fungieran como veedores en esas diligencias, alegando en su resguardo que se había limitado a cumplir sus funciones puesto que esa entidad estaba obligada a participar como Veedora, haciendo de lado el que al concurrir en él causales de impedimento estaba en la obligación de declararlas, sin que ello significara que la Personería omitiera cumplir con sus obligaciones, porque el impedimento solo lo cobijaba a él individualmente considerado y no al ente de control que dirigía, como tal.

Ahora, si bien el apoderado del disciplinado dijo haber probado que los funcionarios de la Personería que fueron comisionados no solo no recibieron órdenes de desaparecer evidencias que comprometieran a su jefe, sino que tampoco tuvieron acceso a la documentación incautada, de lo expresado por este Despacho no puede inferirse que éstas fueran las únicas formas en que podía expresarse el interés del señor ROJAS BIRRY, pues bastaba que sus delegados hubieran tenido conocimiento de hallazgos que lo implicaran para darlo a conocer a su superior y éste pudiera tomar medidas. No obstante, es menester no perder de vista que no se hicieron descubrimientos en ese sentido y por lo tanto, imaginar lo que hubiese podido suceder de haber sido así no es tema del proceso, además porque lo cierto es que la ley no exige que el interés se vea satisfecho de algún modo, basta que exista como en efecto se demostró en el presente caso. Es por ello que para el Despacho no hay dudas de que la Personería en los operativos ejerció una forma de control, que ROJAS BIRRY tenía interés directo en ese control, de ahí que se diera por establecida la tipicidad.

Así mismo, la defensa pregonó también que se estructuró un tipo disciplinario nuevo en sede del fallo sancionatorio cuando en el proveído se expresó que el conflicto de intereses se dio con el interés general que como servidor público debía representar el Personero, sin que al respecto tuviera relevancia que la participación de la entidad fuera a iniciativa suya o por solicitud de terceras personas. Y además puso en tela de juicio que la situación hubiese variado si el señor ROJAS BIRRY se hubiera declarado impedido y la Personera Auxiliar hubiese efectuado la designación de los funcionarios y reclamó que la Procuraduría explicara por qué consideraba que sí.

Insistió en que seguía siendo un imposible jurídico estructurar la tipicidad bajo los otros supuestos con los que sorprendió el fallo porque dice que el Personero no provocó los operativos contra DMG ya que debía actuar por obligación legal; porque no se probó que hubiera actuado parcializadamente; porque no tenía el control



directo sobre el operativo y si lo hubiera tenido no se demostró que como autor mediato hubiera desplegado una conducta constitutiva de conflicto de intereses actuando parcializadamente y porque no se encontró evidencia documental que diera pábulo a las suposiciones fácticas plasmadas en la acusación, por todo ello considera que la conducta de su representado no afectó sustancialmente el deber funcional a cargo del Personero Distrital.

De lo dicho en los párrafos anteriores por el apoderado de ROJAS BIRRY, para esta instancia emerge con claridad meridiana que la defensa invierte el orden de las cosas en la interpretación de la norma, pues no se trata de que su prohijado hubiera desplegado una conducta constitutiva de conflicto de intereses lo que es objeto de censura, sino de que existiendo el prenombrado conflicto no debió haber actuado y para ello es que se encuentra prevista la figura del impedimento precisamente.

Por otra parte, si bien la defensa no dijo explícitamente a que evidencia documental hacía referencia, el Despacho supone válidamente que se alude a los dineros que recibió de DMG el disciplinado y aunque le asiste razón en que no se encontraron soportes documentales, cosa que en el fallo se hizo patente, es oportuno recalcar que no era éste el único medio de convicción que admitía la ley para probar los eventos y, de hecho, en el proceso se contaba con otras pruebas, tales como los registros de las interceptaciones a las comunicaciones telefónicas realizadas entre diferentes empleados de confianza de DMG en momentos en que se preparaba la entrega de la millonaria suma a ROJAS BIRRY; los informes de Policía Judicial cuyo contenido fue corroborado por quien adelantó la investigación, mediante testimonio que se recibió en audiencia pública en la que estuvo presente el doctor FRANCISCO ROJAS BIRRY, la declaración del Presidente de DMG David Murcia Guzmán, quien dijo haber autorizado que se le entregaran 200 millones de pesos al Personero, el testimonio de William Suárez, cuñado de David Murcia, quien aseveró haber entregado el dinero personalmente a ROJAS BIRRY en la residencia de éste, atestaciones que no fueron refutadas, desmentidas y ni siquiera cuestionadas por él, pese a encontrarse presente al momento de la diligencia y a que fue directamente confrontado por ellos, ante lo cual guardó silencio.

Así pues, no es de meras suposiciones o especulaciones de lo que el Despacho obtuvo la certeza que lo llevó a declarar la responsabilidad del doctor FRANCISCO ROJAS BIRRY, sino, justamente, de esos medios de prueba mencionados a los que se les otorgó credibilidad porque no solo fueron válidamente recaudados sino que no fueron rebatidos por el disciplinado ni por su apoderado, quienes enfilaron sus argumentos únicamente a desvirtuar que los funcionarios de la Personería hubieran recibido instrucciones respecto de los hallazgos en desarrollo de los operativos, a señalar que no se obtuvieron evidencias documentales y a que la actividad de la Personería en los actos de intervención no fue de control.

Por otra parte, pese a los cuestionamientos del abogado defensor debe admitirse que, en el caso en cuestión, para la Personería existía el interés de la función pública en su participación como Veedora y era el de servir de garante del respeto por los derechos fundamentales en desarrollo de los operativos, pero el vínculo que tenía el Personero Distrital FRANCISCO ROJAS BIRRY a nivel particular con DMG por cuenta



del dinero que recibió pero que negó de manera enfática y reiterativa, le aparejaba un interés adicional y contrapuesto en la participación de la entidad a su cargo en los operativos, cual era el que no se hiciera pública esa verdad. De allí es que se deriva la ilicitud sustancial del comportamiento que se le reprochó al disciplinado; el doctor ROJAS BIRRY tenía el deber funcional de respetar y hacer respetar la ley y no lo hizo cuando omitió declararse impedido para actuar en un asunto en el que tenía interés particular y directo en su control.

El apoderado de FRANCISCO ROJAS BIRRY argumentó que la acción típica concreta no se podía establecer sino a partir del enjuiciamiento jurídico del hecho frente a la norma que lo consagra como falta y tal como aquel realmente se produjo, porque de lo contrario se infringiría el principio de tipicidad. Aludió también a que esta categoría jurídica se planteó en el auto de cargos como ausencia de justificación de la conducta y no sobre la base de identificar el carácter sustancial de la afectación funcional del deber infringido que implica verificar si se desconocieron los principios de la función pública, por eso insiste en que el Despacho debía explicar como se contravino el ejercicio correcto, transparente e imparcial de la función pública cuando el Personero obró en cumplimiento de un deber legal. Se pregunta cómo se afectó la transparencia al designar funcionarios de apoyo a un operativo cuando ellos iban con la misión de velar por el objetivo que los explicaba como veedores ciudadanos; cómo se afectó la imparcialidad si no iban a tomar decisiones de fondo y con su designación el Personero tampoco decidió nada de fondo?

Para cimentar sus cuestionamientos apeló al contenido del inciso sexto del artículo 3º del Código Contencioso Administrativo que regula el principio de imparcialidad, para señalar que, si se desconoció, el Despacho debió explicar como se desconoció esa garantía con la expedición de las resoluciones. Plantea que la providencia no precisó cómo se afectó sustancialmente el deber funcional y cómo la afectación implicó el desconocimiento de los principios que rigen la función pública. Asevera que proferir unos actos administrativos no viola por sí solo ningún deber funcional.

Respecto de la culpabilidad se pronunció diciendo que resultaba precario estructurar el dolo del Personero Distrital de Bogotá sobre la base de conocer que había recibido dineros de la firma DMG y que a la entidad a su cargo le correspondía actuar como veedora en los operativos adelantados contra aquella.

Finalizó diciendo que ROJAS BIRRY no intervino directa ni indirectamente en ningún operativo; que obró en cumplimiento de un deber legal al designar funcionarios que acompañaran en desarrollo del mismo; que esa designación no era intervenir en el operativo y de haberlo hecho, al no dar órdenes en el sentido que podría sugerir el conflicto de intereses que inicialmente se quiso configurar, tampoco se incurrió en falta disciplinaria porque no hay afectación del deber funcional.

Para este Despacho no puede perderse de vista que entre los deberes funcionales del Personero estaba el de hacer que se respetaran la Constitución y las leyes y al incurrir él mismo en el desobedecimiento del mandato de declararse impedido por existir un conflicto de intereses previsto en el artículo 40 del CDU, incurrió en un quebrantamiento de la ley disciplinaria del modo que se ha señalado insistentemente,



de ahí pues que resulte insoslayable la vulneración sustancial a ese concreto deber funcional, circunstancia que se planteó desde la formulación de cargos que se hizo en los siguientes términos:

«El doctor FRANCISCO ROJAS BIRRY, en su condición de personero de Bogotá, D.C., omitió el deber de declararse impedido para actuar en las acciones realizadas contra la firma DMG, debido a la existencia de un posible conflicto de intereses con la citada sociedad y expidió las resoluciones 402, 404 y 406 del 21 de noviembre de 2008 mediante las que comisionó a servidores públicos de la Personería de Bogotá, con el propósito de que en su calidad de veedores asistieran a los operativos en contra de DMG que se llevarían a cabo el 21, 22, 23 y 26 de noviembre del mismo año».

Por otro lado, era menester hacer hincapié en que la conducta enrostrada no tenía justificación porque, de haberla tenido, tal circunstancia hubiese desvirtuado la existencia de ilicitud sustancial y por lo tanto hubiesen resultado fútiles las restantes valoraciones. De lo dicho se colige que la referencia a la injustificación de la conducta como elemento imprescindible de la categoría dogmática aludida no excluye, como pretende la defensa que hizo el fallo, la consideración de la vulneración sustancial del deber funcional de ROJAS BIRRY por vía del desconocimiento de los principios de imparcialidad, transparencia y correcto ejercicio de la función pública que la rigen, porque en aras de preservar los mismos ROJAS BIRRY ha debido marginarse de cualquier actuación que le correspondiera adelantar, en su calidad de Personero, con relación a DMG.

En punto de la culpabilidad, lejos de lo planteado por el apoderado del disciplinado, según el cual al tipificarse la conducta reprochada a título de dolo el Despacho se quedó corto, recuérdese que se dijo de manera clara que Una conducta es dolosa cuando el agente conoce los elementos constitutivos del deber y omite su realización o conociendo los elementos constitutivos de la prohibición realiza la conducta. Se explicó que en materia disciplinaria el dolo se compone de un elemento cognoscitivo y otro volitivo, a su vez el elemento cognitivo se divide en dos:

1. El conocimiento de los elementos de la conducta descrita en el mandato o prohibición.
2. El conocimiento mismo del deber o prohibición

Respecto del primero se aludió a las pruebas que el Despacho tuvo en cuenta para tener por cierta la entrega de 200 millones de pesos a ROJAS BIRRY por DMG, vínculo del cual surgía un interés indudable por parte de aquel respecto de la suerte de dicha firma. Primera situación que era conocida por el Personero cuando se le requirió su presencia en los operativos.

En su condición de Jefe del Ministerio Público en el Distrito Capital de Bogotá, es incuestionable el conocimiento que debía tener del artículo 40 del Código Disciplinario Único, esto es, la norma que le imponía el deber de declararse impedido para "actuar" en un asunto cuando tuviera un interés particular y directo en su control,



forma que entre las posibles contempladas por la disposición en cita es la que le correspondía a la Personería dada la naturaleza de sus funciones. Al no declararse impedido incurrió en la omisión de dicho deber, que a su vez es constitutiva de falta gravísima, acorde con lo normado por el numeral 17 ibídem. A contrario sensu no solo no se declaró impedido sino que tuvo una actuación cuando designó funcionarios de la entidad bajo su dirección para que participaran como veedores en los operativos de intervención en contra de DMG, el grupo que lo favoreció con 200 millones de pesos antes de posesionarse como Personero, cuando lo correcto hubiese sido que se separara por completo y en cualquier sentido del asunto, habida cuenta de sus lazos con el grupo empresarial objeto de intervención. De lo dicho emerge más allá de toda duda que se estructuran los elementos constitutivos del dolo, como quiera que si el agente conocía y a pesar de ese conocimiento actuó, sin que mediara en su favor causal alguna de exclusión de responsabilidad, es porque así lo quiso, es decir, actuó con conocimiento y voluntad, esto es, con dolo.

Como corolario de lo dicho cabe recalcar que estas reflexiones fueron vertidas a lo largo del fallo y los argumentos defensivos propuestos en el recurso no lograron desvirtuar la convicción adquirida por el Despacho, es por eso que no se concede razón al abogado en sus pretensiones.

5. CONCLUSIÓN

Por todo lo expuesto y teniendo en cuenta, además, que por parte de la defensa no se esbozaron planteamientos nuevos que pudieran hacer variar el criterio del Despacho, se considera que está demostrada la responsabilidad disciplinaria que se endilgó al doctor FRANCISCO ROJAS BIRRY en su condición de Personero de Bogotá, D.C, para la época de los hechos, por la falta gravísima contenida en el numeral 17 del artículo 48 del Código Disciplinario Único, imputación jurídica que se efectuó en el pliego de cargos y por la que se le sancionó con destitución e inhabilidad por doce (12) años en el fallo del 21 de febrero de 2012, razón por la cual se procederá a confirmar dicha decisión.

En mérito de lo expuesto, el Procurador General de la Nación en ejercicio de sus atribuciones legales,

RESUELVE

PRIMERO: CONFÍRMESE el fallo de única instancia del 21 de febrero de 2012, conforme a las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: En firme esta decisión y para que ésta surta los efectos jurídicos, por la secretaría de la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios, NOTIFICAR a los jurídicamente interesados, con la advertencia de que contra la misma no procede recurso alguno.

TERCERO: En firme esta decisión, diligenciar el formulario de Registro de Sanciones Disciplinarias y remitirlo al Grupo SIRI, para los fines previstos en las resoluciones



internas números 143 y 363 de 2002, 156 de 2003 y 296 de 2004, y diligenciar su cumplimiento por parte de los órganos competentes.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado
ALEJANDRO ORDÓÑEZ MALDONADO
Procurador General de la Nación

IUS 73572 / IUC-792-109462
JOOP/AMMP